

E

Alzas y devaluación

CARLOS FIGUEROA, Ministro de Economía del actual Gobierno, tiene a su haber intelectual una curiosa teoría: decretar la libertad de precios, en un mercado ávido de lucro, no significa aumento de precios.

La realidad, tan conocida por las dueñas de casa y cuyo símbolo, según la opinión autorizada del señor Eduardo Frei, cuando era candidato a la Presidencia de la República, es la canasta que las dueñas de casa utilizan o utilizaban en sus obligadas visitas a mercados o a los almacenes, esa realidad irredargüible, parece empeñada en desarmar la teorización ministerial.

En una economía como la que sufrimos los chilenos, soltar los controles sobre los precios significa, en los hechos, una autorización para las alzas.

Tampoco tiene validez la afirmación del Ministro de Economía de que con la libertad de precios se trata de superar un problema estacionario.

El Ministro no ha demostrado que eso sea efectivamente así. No lo ha demostrado ni podrá hacerlo.

De nuevo, en esto, el señor Figueroa entra en abierto conflicto con la realidad.

EL GOBIERNO, mediante la resolución que comentamos, ha dado vía libre a una nueva cadena de alzas que contribuirá a deteriorar aún más la economía de los hogares modestos de nuestra población.

Paralelamente con esto, el Ejecutivo ha adoptado otra medida que también perjudica, aunque indirectamente, la economía de todos los chilenos y especialmente de los que viven de un sueldo, un salario o una jubilación: la cuarta desvalorización del escudo en relación con el dólar, en lo que va corrido del año.

De esta manera el gobierno de la democracia cristiana juega las cartas económicas que más favorecen a los poderosos círculos económicos de los exportadores —fieles militantes de la Derecha económica— que hacen el gran negocio: aumentan sus ganancias sin haber producido más, sin haber exportado más y sin haber traído más divisas al país.

También el Gobierno juega las cartas que convienen a sus "socios" en el negocio del cobre. Las compañías norteamericanas —"socias" del Estado chileno— pueden, cada quince días, retornar menos divisas al país para cubrir acá sus compromisos económicos emanados de la explotación de nuestra principal riqueza mineral.

EL EJECUTIVO en reiteradas ocasiones ha acusado a los gremios de impulsar una política inflacionista cuando exigen mejoramiento de sueldos y salarios, reajustes que en realidad devuelvan su perdida capacidad adquisitiva a las remuneraciones que perciben los trabajadores. A través de esas declaraciones, se podría creer que este Gobierno como el anterior, el de Jorge Alessandri Rodríguez, actúa inspirado por la necesidad de poner un dique de contención al proceso inflacionario. La realidad es otra. El Ejecutivo impulsa el proceso con el evidente propósito de amparar a poderosos intereses nacionales y extranjeros que gravitan pesada y negativamente sobre la economía nacional.

Las alzas y la devaluación del escudo forman parte de una política antinacional, que permite que salgan ingentes sumas de dinero para gloria y solaz de pequeños grupos de privilegiados. Mientras tanto, con una insensibilidad pasmosa, el Gobierno insiste en su política de echarle la culpa de todos los males económicos que afligen a Chile, a los trabajadores.

La dura experiencia económica de los trabajadores chilenos en los últimos años, les ha enseñado que tanto la derecha clásica, atrincherada en el Partido Nacional, como la nueva derecha, que tiene sus bastiones principales en los altos círculos de la democracia cristiana, sirven en lo fundamental los mismos intereses económicos. Y el pueblo sabe también que aquellos intereses no son los suyos ni los del país.